

NACIONES UNIDAS  
CONSEJO  
ECONOMICO  
Y SOCIAL



Distr  
GENERAL

E/CN.4/1986/29/Add.3  
20 de diciembre de 1985

Original: ESPAÑOL



COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
42º período de sesiones

APLICACION DE LA CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA REPRESION  
Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID

Informes presentados por los Estados partes en virtud  
del artículo VII de la Convención

Adición

ECUADOR<sup>1/</sup>

[Original: español]

[2 de septiembre de 1985]

En virtud de lo establecido en el artículo VII de la "Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid" y en su calidad de Estado signatario y ratificante de la misma, el Ecuador somete a consideración del Comité Especial del Apartheid, su informe acerca de la aplicación de dicha Convención.

En el territorio ecuatoriano no existen prácticas o políticas de discriminación o segregación racial. Así, la Carta Fundamental del Estado, aprobada por el pueblo ecuatoriano en pleno ejercicio de su derecho soberano mediante referéndum de 15 de enero de 1978 y vigente desde el 10 de agosto de 1979, condena estas prácticas y políticas inhumanas.

En efecto, el artículo 4 dice así:

"El Estado ecuatoriano condena toda forma de colonialismo, neocolonialismo y de discriminación o segregación racial. Reconoce el derecho de los pueblos a liberarse de estos sistemas opresivos."

Igualmente, el artículo 19 de la Constitución política del Estado, al referirse a los derechos de la persona, establece que todo individuo goza de la garantía de la igualdad ante la ley y, en consecuencia, prohíbe toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen social, posición económica o nacimiento.

---

<sup>1/</sup> El informe inicial presentado por el Gobierno de Ecuador (E/CN.4/1983/24/Add.2) fue examinado por el Grupo de los Tres en su período de sesiones de 1983.

El citado precepto constitucional garantiza la inviolabilidad de la vida, la integridad personal y el derecho a su pleno desenvolvimiento material y moral; el derecho a la libertad de opinión y a la expresión del pensamiento por cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal, por los abusos en que se incurra en su ejercicio, de conformidad con lo previsto en la ley; el derecho al honor y a la buena reputación; la libertad de conciencia y la de religión, en forma individual o colectiva, en público o en privado; el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y de escoger su residencia; el derecho a un nivel de vida que asegure la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; la libertad y seguridad personales y la libertad de contratación, de trabajo y el derecho de asociación, garantías estas últimas que son reguladas ampliamente en el Código de Trabajo vigente.

El mismo artículo 19, en su numeral 16, al garantizar la libertad y seguridad de todo individuo, prohíbe la esclavitud o servidumbre en todas sus formas, pues al Estado le corresponde la función primordial de asegurar la vigencia de los derechos humanos, libertades fundamentales del hombre y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes, aplicables únicamente sobre la base de las premisas antes señaladas.

A este respecto, el Canciller ecuatoriano manifestó en la Asamblea General de las Naciones Unidas que "el Ecuador, desde el nacimiento a la vida independiente, ha sido un defensor permanente de la libertad del hombre y uno de los primeros países en eliminar totalmente la esclavitud, dentro de un proceso que se inició con las ideas geniales del Libertador Simón Bolívar cuando formábamos parte de la Gran Colombia. En 1851, el Ecuador suprimió el último remanente del sistema esclavista. La eliminación de la discriminación racial ha sido igualmente objeto de legislación amplia a lo largo de la historia ecuatoriana y se consagra plenamente en la Constitución política del Estado".

La Constitución política del Estado contempla en su artículo 19, numeral 16, literal j, la vigencia del derecho de habeas corpus cuando dice que "toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad puede acogerse al habeas corpus. Este derecho lo ejerce por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el alcalde o Presidente del Consejo bajo cuya jurisdicción se encuentre o ante quien haga sus veces. La autoridad municipal ordena inmediatamente que el recurrente sea conducido a su presencia y se exhiba la orden de privación de la libertad. Su mandato es obedecido sin observación ni excusa por los encargados de la cárcel o lugar de detención. Instruido de los antecedentes, el alcalde o el Presidente del Consejo, en el plazo de cuarenta y ocho horas dispone la inmediata libertad del reclamante, si el detenido no fuere presentado o si no se exhibiere la orden, o si ésta no cumpliera los requisitos legales, o si se hubieren cometido vicios de procedimiento, o en fin, si se hubiere justificado el fundamento del recurso. El funcionario o empleado que no acatare la orden es destituido inmediatamente de su cargo o empleo sin más trámite por el alcalde o Presidente del Consejo, quien comunica la destitución a la Contraloría y a la autoridad que deba nombrar su reemplazo. El empleado destituido, luego de haber puesto en libertad al detenido, puede reclamar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro de ocho días de notificado, de su destitución.

De otro lado, y en el caso de producirse una violación a las normas constitucionales que se han consignado anteriormente, el ciudadano afectado podrá indistintamente acudir a los tribunales y juzgados de la República o al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, cuya competencia fue reconocida por el Ecuador mediante declaración especial formulada el 21 de marzo de 1977.

Finalmente, el artículo 44 de la Carta Política dispone que el Estado garantiza a todos los individuos, hombres o mujeres que se hallen sujetos a su jurisdicción, el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos civiles, políticos, económicos-sociales, y culturales, enunciados en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes.

Por último, en el caso de que los miembros del Comité Especial del Apartheid lo solicitaren, al Gobierno del Ecuador le será grato ampliar el contenido del presente informe o absolver las consultas que sobre el tema se formulen.

-----